

Concepción, treinta de mayo de dos veintidós.

VISTOS:

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma de la parte demandante Servicio Nacional del Consumidor:

Primero: Que, en lo principal de su presentación de folio 152 del expediente virtual, el apoderado de la demandante, Servicio Nacional del Consumidor, interpuso recurso de casación en la forma en contra de la sentencia definitiva de 29 de abril de 2020, agregada en el folio 146 de la carpeta digital que acogió parcialmente la demanda deducida en contra de la **Sociedad de Consumo de Energía Eléctrica Charrúa Limitada**, y de consiguiente, multándola por la infracción a los artículos 3° letra b y 25 de la Ley de Protección al Consumidor N°19.496; condenándola, por consiguiente, a pagar una multa por el monto de 80 UTM y de 1.000 UTM respectivamente; así como al pago de indemnización de perjuicios.

El referido medio de impugnación es fundado en la causal prevista por el artículo 768 N° 7 del Código de Procedimiento Civil, la cual se interpone por cuanto la sentencia cuestionada advierte decisiones contradictorias en dos especies.

La contradicción consistiría, por una parte, en que la sentencia en cuestión recoge solo dos de las infracciones invocadas: la del artículo 3 inciso primero letra b), y la del artículo 25 de la ley N° 19.496, pero no las de los artículos 3 inciso primero letra e, 12 y 25 del mismo cuerpo normativo. Asimismo, la contradicción se revelaría en que la sentencia impugnada fija a título de indemnización montos contradictorios a los hechos del litigio, la lógica y la sana crítica.

En sentido de lo anterior, el recurrente sostiene que si bien, y a pesar de que la compensación otorgada por el Tribunal es positiva para los consumidores, en estricto rigor, resulta contradictorio que por una parte acoja la indemnización fijada para los clientes rurales, pero fijando montos compensatorios mayores para aquellos consumidores que tuvieran menos tiempo de corte, respecto de aquellos que tuvieron mayor cantidad de horas sin suministro electrónico.

Añadiendo que lo expuesto evidencia una clara contradicción de parte del tribunal de primera instancia, por cuanto, conforme a lo expuesto en los hechos de la demanda y la parte considerativa del fallo, la cual reconoce efectivamente las horas de interrupción, la lógica nos dice, que aquellos consumidores que, tuvieron un mayor tiempo de interrupción, debieron haber sido compensados con 1,5 UMT y los que tuvieron un menos tiempo de interrupción, con 1 UTM, y no, así como lo hizo el tribunal: a la inversa.

Segundo: Que, en relación a los vicios de casación antes referidos, esta Corte estima que no se aprecian en la especie, desde que reiteradamente se ha resuelto que tal motivo de nulidad debe referirse a decisiones contenidas en la parte resolutive de la sentencia que sean incompatibles entre sí, de manera que no puedan cumplirse simultáneamente por interferir unas con otras (entre varias, sentencia de la



Corte Suprema de 03 de julio de 2012, rol 11.546-2011), lo que no se aprecia en la sentencia censurada.

Lo anterior se refuerza desde la convicción de que lo que realidad ha sido objetado por el recurrente no es otra cosa que el contenido de la decisión y su mérito, pues entiende que no resulta factible que se haya condenado infraccionalmente a la demandada por dos de los 5 motivos alegados, y que además se haya acogido la demanda de indemnización de perjuicios sin que éstos hayan sido debidamente cuantificados, lo que no autoriza para disponer la nulidad del fallo por tratarse de un asunto que en realidad atañe al mérito de la sentencia recurrida, y que además, la recurrente interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia cuya invalidación pretende, el cual se funda en los mismos defectos reclamados a título casacional.

II.- En cuanto al recurso de casación en la forma de la demandada Sociedad de Consumo de Energía Eléctrica Charrúa Limitada:

Tercero: Que, en lo principal de su presentación de folio 148 del expediente virtual, el apoderado de la demandada **Sociedad de Consumo de Energía Eléctrica Charrúa Limitada**, interpuso recurso de casación en la forma en contra de la sentencia definitiva ya referida, basado en que el fallo recurrido incurrió en la causal prevista en los artículos 768 N° 9, 795 N° 2 y artículo 52 inciso 9° de la Ley N° 19.496; en el artículo 768 N° 5 en relación con el artículo 170 N° 3 del Código de Procedimiento Civil; y, finalmente en el artículo 768 N° 5 en relación con el artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, y 51 de la ley N° 19.496.

Esto es, la sentencia ha sido pronunciada habiéndose incumplido la forma dispuesta por la ley para el trámite de la conciliación; la sentencia ha sido dictada sin valorar la prueba rendida por la demandada de autos; y, la sentencia advierte infracción en la aplicación del sistema probatorio de la sana crítica, respectivamente; los que constituyen vicios y perjuicios reparables sólo con la invalidación del fallo.

Cuarto: Que, respecto de la primera causal, el recurrente asevera que esta se ha configurado por cuanto constituye condición esencial para la ritualidad del proceso, el llamado a conciliación conforme igualmente lo previene el artículo 262 del Código de Procedimiento Civil.

Indica que, aunque en autos se realizó el llamado a conciliación por resolución de fecha 21 de diciembre de 2017 y se verificó la audiencia con fecha 24 de abril de 2018, aquella en modo alguno se ha realizado con las condiciones especiales de validez que previene el artículo 52 ya de la Ley 19.496.

Sostiene que de la norma citada es posible constatar que el trámite de conciliación se encuentra sujeto a formalidades especiales que no han sido observadas en la presente causa.

Considera que en la parte en que la disposición refiere que se “deberán presentar bases concretas de arreglo”, este deber persigue el que las referidas bases sean puestas en conocimiento de la contraria con



anterioridad a la audiencia, o bien en aquella, a fin de que cada parte pueda exponer lo que a su juicio estime conveniente. Pudiendo incluso el tribunal suspender la audiencia o para efectos de una adecuada deliberación, o posponerla para dentro de tercero día sin necesidad de nueva notificación.

Estima que, la conciliación prevista en la referida norma dista mucho de la prevista en el Código de Procedimiento Civil, constituyendo en ese sentido una norma especial que ha debido ser cumplida bajo sanción de nulidad del proceso en autos sustanciado.

Quinto: Que la segunda causal de anulación alegada, el recurrente la sustenta en que, de la lectura de la sentencia, aparece en forma prístina que ella no ha efectuado valoración alguna de la prueba rendida en la presente causa por su parte. Sostiene que la referida infracción ha influido substancialmente en lo dispositivo de la sentencia, por cuanto ha prescindido en su totalidad de la prueba rendida en esta causa por su parte, sin efectuar consideración ni valoración de ninguna especie.

Añade que, de haberse considerado y ponderado la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, el tribunal debía haber llegado a la conclusión en orden a que la demandada había desplegado toda la actividad necesaria para poner pronto remedio a la interrupción del servicio, más allá incluso de sus propias posibilidades, rechazando con ello la demanda.

Sexto: Que la tercera causal de anulación alegada, el recurrente la funda en que, todas las pruebas que deban rendirse, para conocer las acciones de interés colectivo, serán apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica, debido a lo dispuesto por la ley N° 19.496.

Sostiene que al apreciar la prueba el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas o técnicas en cuya virtud les asigne valor o las desestime.

Afirma que la sentencia impugnada entre los considerandos 6° y 26° que pudieran estimarse considerandos resolutivos no existe referencia alguna a la forma en que se habrían apreciado por el tribunal las distintas probanzas allegadas por las partes.

Considera que dicha infracción ha influido igualmente en lo dispositivo de la sentencia toda vez que, de haberse ajustado la sentenciadora a las reglas de la sana crítica, habría fundamentado su sentencia en dichas normas, acogiendo con ello las alegaciones y excepciones opuestas por esta parte y que resultaron claramente acreditadas en la especie.

Séptimo: Que, en cuanto al primero de los vicios de casación invocados, esta Corte no comparte los fundamentos de la causal de nulidad expuesta precedentemente.

No debe desatenderse que tal como es referido en el folio 25 del expediente virtual, es la misma parte demandada, ahora recurrente, quien no concurrió a la audiencia de conciliación, habiendo sido válidamente notificada.

En razón de lo anterior, lo que puede ser apreciado es que el pleito continuó sustanciándose frente a la inacción de la demandada, quien



habiendo sido debidamente emplazada con fecha 18 de abril de 2018, no compareció a la audiencia de conciliación, ni tampoco presentó bases de arreglo, presentándose estas sin embargo por la parte demandante, tal como consta a fojas 31, del referido expediente.

Así las cosas, apoyarse en su propio comportamiento, con el propósito de construir un vicio de ineficacia procesal como el expuesto no puede ser considerado en el sentido impetrado, máxime si la misma disposición invocada por el recurrente expresa que la referida audiencia se llevará a cabo con las partes que asistan.

Octavo: Que, respecto del segundo y del tercero de los vicios de casación interpuestos, aparece de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable sólo con la invalidación del fallo, desde que, además, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia cuya invalidación pretende, el cual se funda en los mismos defectos reclamados a título casacional, esto es, en no realizar una adecuada ponderación de la prueba y de los hechos de la causa.

De esta manera, los vicios denunciados - de ser efectivos - son susceptibles de ser corregidos a través de aquel recurso y, por ende, corresponde desestimar la casación en la forma impetrada.

III.- En cuanto al recurso de apelación demandante Servicio Nacional del Consumidor.

Se reproduce la sentencia en alzada de 29 de abril de 2020, en su parte expositiva, y sus considerandos con excepción de los motivos décimo noveno y vigésimo. Por su parte, respecto del considerando décimo primero, sustitúyase la expresión “considerando 24º nº2” por “considerando 8º Nº 2”.

Y SE TIENE EN SU LUGAR Y, ADEMÁS, PRESENTE:

Noveno: Que, la parte demandante, Servicio Nacional del Consumidor, en subsidio del recurso de casación de forma, en contra de la sentencia definitiva interpuso recurso de apelación, para que este tribunal, conociendo del recurso, lo acoja, y enmiende conforme a derecho la sentencia recurrida, haciendo lugar en todas sus partes a la demanda por su parte incoada, esto es, declarando expresamente:

a) Que se condena a la Sociedad de Consumo de Energía Eléctrica Charrúa Ltda.”, como infractora de los artículos 3 inc. 1 letra e), artículo 12 y 23 condenando al máximo de las multas contempladas en la Ley, por cada una de las infracciones demandas y por cada uno de los consumidores afectados, conforme a lo prevenido por el artículo 53 C, letra b) de la LPC.

b) Que se compense y/o indemnice a los consumidores rurales afectados, con los siguientes montos: Clientes rurales + 30 horas de interrupción = 1UTM; y, Clientes rurales – 30 horas de interrupción = 1,5 UTM;

c) Que se condena expresamente a la demandada a todas las costas de la causa, incluidos los recursos;

d) Que se imponga a la infractora cualquiera de otra sanción, sí se estime procedente en derecho aplicar.



Décimo: Que la parte demandante esgrime que desde una perspectiva infraccional la demandada ha vulnerado un serie de normas dispuestas por la Ley N° 19.496, a saber: el artículo 3 letra b) que establece que el consumidor tiene derecho *“a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismo, y el deber de informarse responsablemente de ellos”*; el artículo 3 letra e), que consigna que, el consumidor goza del *“derecho a la reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el proveedor, y el deber de accionar de acuerdo a los medios que la ley franquea”*; el artículo 12, que establece que *“todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales se hubiere ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio”*; el artículo 23, que ordena que: *“Comete infracción a las disposiciones de la presente ley el proveedor que, en la venta de un bien o en la prestación de un servicio, actuando con negligencia, causa menoscabo al consumidor debido a fallas o deficiencias en la calidad, cantidad, identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso o medida del respectivo bien o servicio”*; y el artículo 25, que a la época del acaecimiento de los hechos, esto es, con anterioridad de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.081, ordenaba: *“El que suspendiere, paralizare o no prestare, sin justificación, un servicio previamente contratado y por el cual se hubiere pagado derecho de conexión, de instalación, de incorporación o de mantención será castigado con multa de hasta 150 unidades tributarias mensuales. Cuando el servicio de que trata el inciso anterior fuere de agua potable, gas, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono o recolección de basura o elementos tóxicos, los responsables serán sancionados con multa de hasta 300 unidades tributarias mensuales. El proveedor no podrá efectuar cobro alguno por el servicio durante el tiempo en que se encuentre interrumpido y, en todo caso, estará obligado a descontar o reembolsar al consumidor el precio del servicio en la proporción que corresponda”*.

Décimo primero: Que si bien en la ponderación de las multas el tribunal *a quo* consideró lo dispuesto en los incisos 5° y 6° del artículo 24 de la Ley N° 19.496, es del caso indicar que dicha norma no puede tenerse en vista con tal propósito por cuanto la redacción de la misma no era la misma a la época en que se suscitaron los hechos, aun cuando el espíritu es similar.

A mayor abundamiento la redacción del inciso 4° del citado artículo correspondía a la siguiente: *“En esta ley, el tribunal tendrá especialmente en cuenta la cuantía de lo disputado, El grado de negligencia en que haya incurrido el infractor, la gravedad del daño causado, el riesgo a que quedó expuesta la víctima o la comunidad y la situación económica del infractor”*.

Sin perjuicio de lo anterior, es cierto que al ser la demandada una empresa eléctrica con gran participación en la zona en su ámbito de distribución, debiendo presentar la calidad de experta en lo que realiza, implica que se configure la asimetría que califica las relaciones de consumo,



entre otros matices, desde la perspectiva de la información entre el proveedor y el consumidor, y que en la especie es vulneradora de los derechos de aquellos. En este sentido, al no haber la demandada adoptado medidas adecuadas en el sentido de prever o aminorar las consecuencias del evento climático de junio de 2017, va en claro desmedro de la parte débil en la relación de consumo de la cual es protagonista, significando dicha consideración un aspecto valorativo en la aplicación de la multa respectiva.

Décimo segundo: Que en cuanto a la invocación del citado artículo 3 letra e, esta Corte estima que tal como está redactada la norma se eleva como un derecho a la reparación e indemnización por parte del consumidor, no como una obligación a la que debe estar sujeto el proveedor y que en caso de incumplimiento sea infraccionado, por lo cual será rechazada.

Con todo, esta Corte no comparte la aproximación tendiente a reconocer una aplicación de la máxima *non bis in idem* si es que tiene lugar una condena infraccional en razón de las demás normas invocadas con dicho propósito.

Lo indicado, pues en el ámbito de la Ley N° 19.496, es plenamente factible que dos o más normas con vocación infraccional puedan coexistir y conducir a multas diversas, ya que lo que cautela el referido principio es que no se sancionen dos o más veces infracciones al mismo bien jurídico protegido, lo cual en la especie no ocurre.

Así las cosas, es susceptible de ser sancionada a la demandada según el artículo 3 inciso primero, letra b), toda vez existió una vulneración al derecho de información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos; el artículo 12, por cuanto se verifican incumplimiento a los términos y condiciones contractuales; el artículo 23, puesto que se ha vulnerado el deber de profesionalidad que envuelve a la negligencia que considera el legislador; y el artículo 25, en el sentido que se ha suspendido injustificadamente el servicio de energía eléctrica debido por la demandada.

Décimo tercero: Que, en mérito de lo indicado, la demandada no será solo infraccionada bajo los expedientes de los artículos 3 letra b, y artículo 25 de la Ley N° 19.496, como lo hizo el tribunal *a quo* (aunque no de la misma manera, por lo que se dirá), sino que también por vía de la aplicación del artículo 12 y del artículo 23.

En el primero de los casos, ya que ha sido acreditado en autos que el incumplimiento contractual de la demandada no se limita exclusivamente a la interrupción del servicio de electricidad, sino que es más amplio, pues comprende la ineficacia en el despliegue de actividades preventivas tendientes a anticiparse adecuadamente eventos que, por una parte, mal pueden ser entendidos como casos fortuitos, o al menos evitar sus consecuencia; como también la atención oportuna en episodios propios al evento.

A su turno, no debe entenderse que la órbita de lo dispuesto en el citado artículo 12, queda integrado en la del artículo 25, ya que dicha disposición interviene en un espacio más restringido, exclusivamente limitado a la suspensión, paralización o no ejecución de un servicio contratado y por



el cual se hubiere pagado derecho de conexión, de instalación, de incorporación o de mantención.

Por otra parte, es igualmente aplicable la infracción derivada del artículo 23, ya que el desarrollo de los acontecimientos es revelador de falta en la profesionalidad exigible a toda empresa que brinda servicios de la naturaleza como los aquí ventilados, sin que la prueba aportada por la demandada signifique una efectiva demostración de ausencia de la negligencia que exige la norma, la que se presume, y que en ningún caso debe entenderse como base del sistema infraccional o de responsabilidad civil que contempla la Ley N° 19.496.

Cabe hacer presente, además, que compartimos que la obligación de la demandada en estos autos es de resultado tal como lo indica el considerando décimo tercero de la sentencia impugnada, en circunstancias que lo dispuesto en el artículo 23, al referirse a la negligencia, reviste aplicación solo y exclusivamente de acuerdo con la invocación de sus presupuestos normativos, los cuales aquí serán reconocidos, toda vez que la prueba aportada por la demandada en cuanto a demostrar su ausencia de culpa, o falta de negligencia no ha sido efectiva.

En efecto, se ha interrumpido la continuidad del servicio pudiendo aquello, en el entender de este tribunal, haber sido evitado mediante una actividad acorde con el deber de profesionalidad susceptible de ser exigida a la sociedad de autos, en razón de la experticia y habitualidad que naturalmente era posible esperar de ella, elementos que permiten calificar que la actividad propia a la demandada y su pretendido descargue de responsabilidad, no se ajusta a los mismos términos de un contrato libremente acordado como cualquiera regulado por el Código Civil.

Sobre este punto, resulta relevante lo enseñado por las autoras María Elisa Morales y María Paz Gatica, en los siguientes términos: *“La experticia, como elemento del deber de profesionalidad del proveedor, supone un nivel de conocimientos y experiencia propia de su posición, del cual el consumidor carece. Ello determina la asimetría técnica característica de las relaciones de consumo. En consecuencia, el proveedor se encuentra en una posición privilegiada en relación a todos los aspectos relevantes del producto o servicio que ofrece (...) sino que tiene la capacidad técnica de comprender dicha información y actuar en consecuencia (...). La habitualidad, por su parte (...) es un elemento esencial de concepto mismo de proveedor y destaca también en el concepto de comerciante. El proveedor, en el giro que desarrolla, realiza reiteradas operaciones de la misma naturaleza, de forma más o menos masiva y de manera sostenida en el tiempo, mientras que el consumidor normalmente realizará esas operaciones de manera ocasional. Esta habitualidad permite al proveedor adquirir nuevos conocimientos y aumentar su experticia, no solo desde un punto de vista técnico, sino debido a lo que le aporta la experiencia explotando su giro”*. (El deber de profesionalidad como elemento determinante del estándar de diligencia en el derecho del consumo: un comentario a la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel de 15 de marzo de 2019 (Rol N° 484-2018),



Décimo cuarto: Que, en atención a lo antes expresado, en la aplicación de las multas que son procedentes se seguirá la norma que a la época de los hechos se encontraba vigente, a saber: artículo 24 inciso 1º de la Ley Nº 19.496, que establece: “Las infracciones a lo dispuesto en esta ley serán sancionadas con multa de hasta 50 unidades tributarias mensuales, si no tuvieren señalada una sanción diferente”; y artículo 25, inciso 2º, que ordena: “Cuando el servicio de qué trata el inciso anterior fuere de agua potable, gas, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono o recolección de basura o elementos tóxicos, los responsables serán sancionados con multa de hasta 300 unidades tributarias mensuales”. De aquí entonces, que por concepto de vulneración a lo dispuesto en los artículos 3 letra b, 12 y 23, deba aplicársele una condena infraccional, en total, por 150 UTM; mientras que por concepto de lo prescrito en el artículo 25 inciso 2º, una condena de 300 UTM.

Décimo quinto: La parte demandante alega, asimismo, que el tribunal, en su parte resolutive, completa 2 grupos de consumidores afectados (urbanos y rurales), distinguiendo aquellos que tuvieron más de 30 horas, menos de 30 horas, más de 20 horas y menos de 20 horas de interrupción, a saber: Clientes urbanos + 20 horas interrupción = 0,75 UTM; Clientes rurales + 30 horas de interrupción = 1 UTM; Clientes urbanos - 20 horas interrupción = 0,5 UTM; Clientes rurales - 30 horas interrupción = 1,5 UTM.

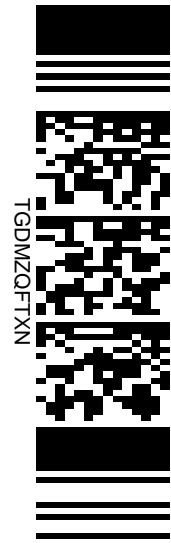
Señala que resulta contradictorio que acoja la indemnización fijada para los clientes rurales, fijando montos compensatorios mayores, para aquellos consumidores que tuvieron menos tiempo de corte, respecto de aquellos que tuvieron mayor cantidad de horas sin suministro electrónico.

Estima que lo expuesto, evidencia una clara contradicción de parte del tribunal de primera instancia, por cuanto, conforme a lo expuesto en los hechos de la demanda y la parte considerativa del fallo, la cual reconoce efectivamente las horas de interrupción, la lógica indica, que aquellos consumidores que, tuvieron un mayor tiempo de interrupción, debieron haber sido compensados con 1,5 UMT y los que tuvieron un menos tiempo de interrupción, con 1 UTM, y no, así como lo hizo el tribunal.

Décimo sexto: Que, para esta Corte, es atendible el motivo de alegación planteado por la demandante, y en este sentido, se estará a la indemnización cuya corrección se solicita, por cuanto resulta lógico y razonable que, a más horas de interrupción del suministro, mayor sea el *quantum* de la indemnización.

IV.- En cuanto al recurso de apelación de la Sociedad de Consumo de Energía Eléctrica Charrúa Limitada.

Que, la parte demandada, **Sociedad de Consumo de Energía Eléctrica Charrúa Limitada**, en subsidio del recurso de casación de forma, en contra de la sentencia definitiva de autos, interpuso recurso de apelación,



para que esta Corte, revoque la referida sentencia y en definitiva declare que se rechaza la demanda en todas sus partes, con costas.

Décimo séptimo: Que la parte demandada cuestiona el considerando décimo tercero de la sentencia definitiva impugnada. En dicha motivación, el tribunal *a quo* entiende como una obligación de resultado la que cabe a la empresa de autos, cuestión que para esta Corte corresponde a una afirmación ajustada a derecho.

La cuestión en referencia es susceptible de proyectarla tanto desde una perspectiva infraccional como civil.

Desde el esquema infraccional, la configuración de los presupuestos de cada una de las figuras típicas que comprende la ley hace merecedora a la demandada de las sanciones que ella misma establece, y sobre las cuales nos hemos pronunciado respecto de la apelación de la demandante.

A su turno, la voz negligencia que efectivamente es utilizada por el legislador en el artículo 23, no debe entenderse como una regla general, sino como una más dentro de las que regula la Ley N° 19.496, en cuya virtud la negligencia referida se debe presumir, más nunca significar una carga probatoria asignable a la parte más débil de la relación de consumo, criterio que conversa en plenitud con el principio pro-consumidor.

En fin, tal como fue referido también a propósito del recurso de apelación de la demandante, en el considerando décimo tercero de esta sentencia, esta Corte entiende que los hechos ventilados en este pleito permiten inferir una vulneración al deber de profesionalidad de la demandada, y en este sentido, los medios probatorios a través de los cuales pretende hacer ilusoria su responsabilidad no consiguen dicho propósito.

Décimo octavo: Que la parte demandada, representa que se ha tenido como prueba fundamental para condenarla la Resolución N° 19.952 de la SEC de fecha 14 de agosto de 2017, sin que se haya reparado que dicha Resolución fue reclamada por su parte ante este mismo tribunal y sobre la cual no ha recaído sentencia firme de forma tal que mal ha podido atribuirle valor probatorio para sancionarla, y que se le ha otorgado pleno valor probatorio al Informe Compensatorio emanado de la propia demandante y que ha sido elaborado por el único testigo que ha declarado en la causa, advirtiendo falencias como la que en su entender figura en la página 14 que indica que: “la información disponible no permitió determinar el historial de horas sin energía de cada cliente durante los eventos y en las comunas afectadas materia de la demanda...”, razón por la cual efectúa en la Tabla N° 4 una “estimación” de cifras referenciales por cada corte.

En el entender de esta Corte, el razonamiento del tribunal *a quo* se ha ajustado a derecho, ya que resulta evidente que la convicción se adquiere a la luz de los antecedentes que constan en el pleito, dentro de los cuales los documentos antes señalados forman parte.

Por otro lado, la determinación de espacios de tiempo en que no existió suministro eléctrico fue establecida en atención al mérito del proceso, a la declaración del testigo de la demandante y del informe compensatorio de autoría del mismo testigo, en atención a la información disponible, dentro de



la cual consta la Resolución de la SEC, que precisamente hace referencia a aquellas periodicidades.

En concreto la resolución expresa en su página 6: “(...) se desprende que 1339 clientes fueron afectados por interrupciones mayores de 20 hrs., de los cuales 615 clientes tuvieron interrupciones por más de 30 hrs., excediendo todos los plazos reglamentarios para la reposición del servicio, constituyéndose el incumplimiento a la normativa aplicable y por el cual corresponde aplicar una sanción”, de aquí que no exista arbitrariedad en la determinación de los espacios de tiempo.

Décimo noveno: Que, en cuanto a lo que indica la demandada, en el siguiente sentido: “esta parte ha sostenido que la interrupción del servicio se encuentra justificado sobradamente en las condiciones climáticas imperantes en el invierno del año 2017”, es del caso señalar, que de acuerdo a la jurisprudencia de nuestra Excelentísima Corte Suprema: “debe tenerse presente que en virtud del principio de la continuidad del servicio público eléctrico, la prestación del mismo debe realizarse sin *black out*, salvo que se trate de una interrupción aceptada y prevista en la regulación por motivos de seguridad o instalación. Desde ese punto de vista el análisis de la causal de justificación debe ser realizada de manera excepcional o restrictiva”. (Corte Suprema, Rol 822-2012 y 97.737-2016).

Cabe consignarse además que, si bien la empresa demandada invoca condiciones climáticas configurativas de un supuesto de caso fortuito, toda vez que la intensidad de los temporales era imprevisible, el hecho es que con anticipación el Instituto Meteorológico de Chile había anunciado el frente de mal tiempo que afectaría a varias regiones, lo cual interpela precisamente dicha imprevisibilidad.

Por otro lado, todos los años se producen frentes de mal tiempo de distintas intensidades, por lo que las empresas eléctricas deben estar prevenidas para afrontar las situaciones que se presenten y poder dar a sus clientes continuidad en el servicio eléctrico.

Que el hecho de mantener más de 20 horas, sin suministro de energía a un número importante de usuarios, es un hecho inexcusable y no se puede entender que sea una fuerza mayor, ya que se habría solucionado con un mayor número de personas y maquinarias trabajando en el lugar, lo que la empresa debió haber previsto y solucionado de forma efectiva.

Vigésimo: Que para la determinación de la indemnización, si bien cierto el sentenciador se apoyó en el Informe Compensatorio elaborado por el testigo presentado por el Servicio Nacional del Consumidor, no debe silenciarse que el sentenciador apeló en su razonamiento a las máximas de experiencia que implican el conocer que una interrupción de suministro eléctrico por más de veinte horas afecta la cotidianeidad de la vida, “teniendo presente además que esto se vuelve crítico en las comunidades rurales, donde atendido a la distancia con la ciudad es sabido que guardan alimentos en congeladores, utilizan motobombas para obtener el agua de pozo, etc. En razón de lo anterior, es que se acogerá la demanda de indemnización de perjuicios, como se dirá” (considerando 23º).



De acuerdo a lo expresado se refuerza la relevancia del señalado informe, el cual, según los dichos de su autor (contrainterrogado en la audiencia testifical) expresó ser basado: “en antecedentes objetivos, fundados en la teoría económica sectorial, así como en antecedentes concretos determinados por los reclamos que presentan los mismos consumidores por estos hechos”, y en el cual puede apreciarse la relación de los daños atribuibles a un incumplimiento como el analizado, a saber: “indisponibilidad de energía eléctrica, pérdida de tiempo laboral o de ocio (costo de oportunidad), pérdida de alimentos refrigerados o congelados, pérdida de medicamentos, falta o limitada calefacción en los hogares durante los meses de invierno, daño o pérdida de electrodomésticos, y/o limitaciones de accesibilidad a otros servicios que depende de energía eléctrica, como la televisión por cable, telefonía e internet”.

Vigésimo primero: Que, para la demandada, la aplicación del artículo 25 como causal de infracción no es procedente por cuanto la suspensión del servicio es justificada. Es del caso señalar, que dicha justificación exclusivamente pudiera asilarse en un evento de caso fortuito, el cual no se configura en la especie de acuerdo a lo indicado precedentemente, así como acertadamente en la sentencia impugnada.

Vigésimo segundo: Que la demandada cuestiona el criterio en la definición de grupos definidos por el tribunal para efectos indemnizatorios. Lo cierto es que la distinción considerada por el tribunal *a quo* es del todo razonable en atención al radio en que la sociedad desarrolla su actividad como en la temporalidad de horas en que se verificó la suspensión.

Por lo expuesto, y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 768 N° 2, N° 7, N° 5, N° 9, 795 N° 2, 170 N° 3, N° 4 del Código de Procedimiento Civil, 3, 12, 23, 25 de la Ley 19.496, **SE RESUELVE:**

I.- Que se **RECHAZAN** los recursos de casación en la forma interpuestos contra la sentencia definitiva de fecha 29 de abril de 2020.

II.- Que se **CONFIRMA** con declaración la sentencia apelada de fecha 29 de abril de 2020, en el siguiente sentido:

a) Que, se condena a la parte demandada por su responsabilidad infraccional fundada en lo dispuesto en los artículos 3 inciso 1ro letra b, 12, 23 y 25 de la Ley N° 19.496.

b) Que, en la aplicación de las multas se seguirá la norma que a la época de los hechos se encontraba vigente, a saber: artículo 24 inciso 1° de la Ley N° 19.496, que establece: “Las infracciones a lo dispuesto en esta ley serán sancionadas con multa de hasta 50 unidades tributarias mensuales, si no tuvieren señalada una sanción diferente”; y artículo 25, inciso 2°, que ordena: “Cuando el servicio de qué trata el inciso anterior fuere de agua potable, gas, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono o recolección de basura o elementos tóxicos, los responsables serán sancionados con multa de hasta 300 unidades tributarias mensuales”.

c) Que, entonces, por concepto de vulneración a lo dispuesto en los artículos 3 letra b, 12 y 23, se condena a la demandada a una multa ascendente a 50 UTM por cada infracción, en total, 150 UTM; mientras que



por concepto de lo prescrito en el artículo 25 inciso 2º, se condena a la demandada a una multa 300 UTM.

d) Que se condena a la parte demandada por concepto de indemnización de perjuicios según la siguiente distinción: Clientes urbanos con más de 20 horas interrupción, la suma de 0,75 UTM; Clientes rurales con más de 30 horas de interrupción, la suma de 1,5 UTM; Clientes urbanos con menos de 20 horas interrupción, la suma de 0,5 UTM; Clientes rurales con menos de 30 horas interrupción, la suma de 1 UTM.

IV.- Que se **RECHAZA** el recurso de apelación deducido por la demandada.

V.- Que no se condena en costas.

Regístrese y comuníquese.

Redactada por el abogado integrante Renzo Munita Marambio.

No firma la ministra titular señora Valentina Salvo Oviedo, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con licencia médica.

Civil 1465-2020. Acumulada 1466-2020.-



Pronunciado por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción integrada por Ministro Suplente Waldemar Augusto Koch S. y Abogado Integrante Renzo Esteban Munita M. Concepcion, treinta de mayo de dos mil veintidós.

En Concepcion, a treinta de mayo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

